



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0050/2017

FECHA: 08 de mayo de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0050/2017 presentada por [REDACTED], el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. El 9 de diciembre de 2016, a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, la ahora reclamante presenta un escrito dirigido a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en el que, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG- solicitaba, con relación al Colegio La Inmaculada-Padres Escolapios de Getafe -Madrid- la siguiente información:

1. Grados o niveles educativos que se imparten en el centro educativo y cuáles son concertados.
2. Copia del Concierto educativo suscrito para la financiación del Centro, así como la información relativa a los niveles educativos que hubieran sido objeto de concierto y la financiación recibida para cada nivel educativo, todo ello, relativo a los 4 últimos años o cursos escolares.
3. Financiación pública recibida en los últimos cuatro años por cualquier otro concepto: subvenciones, ayudas, convenios.etc.

ctbg@consejodetransparencia.es



4. Si toda la actividad realizada por el Centro es educativa o si realizan otro tipo de actividades no educativas al margen del Concierto.
5. Si la totalidad de la actividad educativa realizada por el Centro está integrada en nuestro sistema educativo, y en caso no afirmativo indicar qué otras actividades educativas se realizan.
6. Precios o financiación privada que obtenga el Centro escolar procedente de los padres y por cualquier tipo de actividad, educativa o no educativa, ya sea principal o complementaria.
7. Si dispone de proyecto propio de organización de enseñanza, en caso afirmativo indicar cuáles.

Mediante Resolución de 9 de enero de 2017 del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la indicada Consejería se resuelve la solicitud indicada. En concreto, la solicitud se estimando y, en consecuencia, se facilita la información que dispone la indicada Dirección General en el ámbito de sus competencias, que se cifra en lo siguiente

- Las enseñanzas autorizadas al centro escolar, así como la identificación de aquéllas que tiene concertadas en el curso actual 2016/17, pueden conocerse mediante el Buscador de Colegios, al que puede accederse a través de la página web oficial de la Comunidad de Madrid. En el Buscador consta también aquella otra información relativa a los servicios complementarios y a otras actividades que pueda ofertar el centro.

Los requisitos mínimos que deben reunir los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria vienen establecidos por el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero. El artículo 3 del mismo dispone, en su apartado 2, que los centros deben "situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo". Por otra parte, la normativa de aplicación al desarrollo de las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares en los centros privados concertados se encuentra establecida en los artículos 51, 57 y 62 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, en el Real Decreto 1694/1995, de 20 de octubre, y en las Instrucciones de esta Dirección General de fecha 27 de julio de 2016 relativas a la autorización de precios por actividades complementarias y asignación de cuotas por servicios escolares y actividades extraescolares en los centros privados concertados.

En definitiva, cualquier actividad que se desarrolle en un centro concertado distinta a la estrictamente docente y curricular debe respetar el citado marco normativo.

- Por lo que se refiere a los documentos de concierto suscritos con el titular para las diferentes enseñanzas, firmados en 2013, responden a los modelos



aprobados por la Orden 5286/2009, de 23 de noviembre de la Consejería de Educación (BOCM de 23 de diciembre), de conformidad con lo establecido en el artículo Decimoquinto de la Orden 297/2013, de 8 de febrero, relativa a la renovación de los conciertos y el acceso a los mismos durante el período 2013/2017. Las unidades que se indican en dichos documentos son las incluidas en la Orden 2730/2013, de 28 de agosto (BOCM de 30 de agosto), por la que se aprobó la renovación de los conciertos educativos a partir de 2013/14.

En cuanto a las cantidades abonadas a La Inmaculada-Padres Escolapios por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte en virtud del concierto se informa que recibe los importes en función del número de unidades que tiene concertadas en cada nivel educativo, según los módulos económicos anuales para la financiación de los centros privados sostenidos con fondos públicos que figuran en las leyes de presupuestos de la Comunidad de Madrid para cada ejercicio económico. Estas leyes han sido: Ley 7/2012, de 26 de diciembre (para el ejercicio 2013) Ley 5/2013, de 23 de diciembre (para el ejercicio 2014) Ley 3/2014, de 22 de diciembre (para 2015) Ley 6/2015, de 23 de diciembre (para 2016)

La cuantía correspondiente a "otros gastos" del módulo económico se abona mensualmente a los centros, que deben justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Las cuantías correspondientes a los salarios y gastos variables se abonan al profesorado del centro a través de la nómina de pago delegado.

- *Por Orden 1495/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte (BOCM de 9 de junio de 2015), fue autorizada al centro La Inmaculada-Padres Escolapios, entre otros, la implantación a partir del curso 205/16 de un proyecto propio de Formación Profesional, que afectaba al ciclo formativo de grado superior Automoción.*

A través de un escrito de 8 de febrero de 2017, y fecha de registro de entrada en esta Institución el siguiente 9 de febrero, la ahora reclamante interpone, al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación frente a la citada Resolución de 9 de enero de 2017, al considerar que no se ha dado respuesta a la mayor parte de las cuestiones planteadas, en unos casos, o haberse dado respuesta de forma manifiestamente parcial, imprecisa o genérica, en otros. Los motivos de la reclamación, atendiendo a las distintas preguntas planteadas en la solicitud originaria de acceso a la información, se pueden sistematizar de la siguiente manera:

- A la pregunta 1 no se está dando una respuesta adecuada y suficiente a la cuestión planteada. [...] Resulta extraño que, si como parece dar a entender, la información ya está publicada, no se entiende por qué en vez de suministrarla nos remiten a realizar una búsqueda en Internet, siendo la función del portal de transparencia, precisamente la de suministrar la información.



- La pregunta 2 es incompleta al no facilitar el Convenio suscrito bilateralmente por el propio ente y el centro escolar, y, por el contrario, remitirnos a los modelos publicados en una Orden, la resolución publicada en otra Orden (Orden 2730/2013) con los niveles educativos y número de unidades (educativas) y a la publicación en la Ley de Presupuestos de cada año de la financiación a recibir por cada unidad objeto del concierto. Información que, además, es de difícil búsqueda y comprensión.
 - Las preguntas 3, 4, 5 y 6 no han sido contestadas.
 - La pregunta 7 podría ser incompleta dado que con la mera consulta en un buscador de internet se observa que conforme a la Orden 5279/2012, de 10 de mayo, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se autoriza la implantación de proyectos propios de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en centros concertados y privados de la Comunidad de Madrid a partir del año académico 2012-2013, se incluye la autorización de un proyecto propio de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en el centro LA INMACULADA-PADRES ESCOLAPIOS.
2. El 13 de febrero de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente, por una parte, a la Dirección General Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano para conocimiento, y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, formularan las alegaciones que estimasen por conveniente, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizar.

Mediante escrito de 28 de febrero de 2017 del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, con fecha de registro de entrada en esta Institución el siguiente 1 de marzo, se trasladan las siguientes alegaciones a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con relación a cada una de las preguntas contempladas en la solicitud de referencia:

- Con relación a la pregunta 1, se confirma la información facilitada. El objeto del Buscador de Colegios es, precisamente, facilitar al ciudadano, entre otra, la información que requiere la interesada: enseñanzas autorizadas y concertadas. En este sentido, el dato del “número” de unidades concertadas al que se refiere ahora en sus alegaciones no aparece, en efecto, en el Buscador. Pero éste no es un dato que hubiera sido requerido en la petición. (En cualquier caso, como se refiere posteriormente, también fue facilitado).
- En cuanto a la pregunta 2, se indica que la solicitud de la copia del concierto suscrito por el titular del centro sí fue contestada al facilitarse los modelos por los que, necesariamente, deben formalizarse todos los conciertos. Asimismo, se añade, no se entiende la causa por la que no resulta comprensible a la interesada la referencia a las unidades concertadas contenidas en la Orden 2730/2013, de 8 de febrero. Como consta en la página del BOCM aportada por ella misma –referida a las enseñanzas de infantil, primaria, ESO y bachillerato– el número de unidades concertadas era 12, 24, 24 y 0, respectivamente. Por último, por lo que se refiere a “financiación recibida para cada nivel educativo,



todo ello, relativo a los 4 últimos años o cursos escolares”, debe reseñarse que no existe un informe con un formato que recoja los datos solicitados. Por ello, se aportó la referencia a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la información de las unidades concertadas (la citada Orden 2730/2013, de 8 de febrero) e importes financiados por unidad desde el curso 2013/14 (las sucesivas leyes de presupuestos).

- Por lo que respecta a la pregunta 3, se pone de manifiesto que la precitada Dirección General sólo conoce y puede informar de la financiación que el titular del centro recibe por la cualidad de “concertado” del centro La Inmaculada-Padres Escolapios. Desconoce si recibe otra financiación pública, que, en su caso, sería ajena a su ámbito de competencias.
- En lo que respecta a la pregunta 4 se precisa que la Dirección General es competente para autorizar y supervisar la impartición por el centro de enseñanza reglada, así como de regular las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que, en su caso, pueda ofertar. Cualquier otra actividad que se desarrolle en un centro concertado distinta a las referidas no tiene por qué ser ni siquiera conocida por la Administración educativa, asumiendo el titular la responsabilidad de que ésta respete el marco normativo que se indicaba en la contestación que fue remitida a la interesada
- Por lo que se refiere a la pregunta 6, en el escrito de alegaciones se adjunta un cuadro comprensivo de los precios declarados por este centro en 2016-2017, según informe de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Sur, distribuidos por concepto y euros/mes.
- Finalmente, por lo que respecta a la pregunta 7, se reitera la información ofrecida anteriormente, en el sentido de que el centro tiene autorizado un proyecto propio en el ciclo formativo de grado superior “Automoción”, aprobado por la Orden 1495/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Los proyectos propios de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que este centro tuvo autorizados por la Orden 5279/2012, de 10 de mayo, de la Consejería de Educación y Empleo, quedaron sin efecto a la finalización del curso 2014-2015 en Educación Primaria y a la finalización del curso 2015-2016 en Educación Secundaria Obligatoria, todo ello en aplicación de la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid y de la Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno,



la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.

2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Por lo que respecta al fondo del asunto planteado en esta Reclamación, cabe advertir que las diferentes preguntas contenidas en la solicitud de acceso a la información se refieren a distintos aspectos de la LTAIBG, circunstancia que nos obliga a realizar una sistematización de las mismas para proceder a su examen.

De este modo, en primer lugar, por lo que respecta a la pregunta número 1 de la solicitud que origina esta reclamación, la ahora reclamante no está conforme con la contestación remitida por la administración autonómica, por cuanto *“no se entiende por qué en vez de suministrarla [la información] nos remiten a realizar una*



búsqueda en internet, siendo la función del portal de transparencia, precisamente la de suministrar información”.

Con carácter preliminar hay que recordar que la LTAIBG dentro de su Título I, relativo a la “Transparencia de la actividad pública”, dedica sus capítulos II y III a regular, respectivamente, las obligaciones de publicidad activa y el procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esto es, en ambos capítulos se regulan la denominada publicidad activa y publicidad pasiva, manifestaciones de la transparencia y el acceso a la información pública.

De este modo, por lo que respecta a la relación entre publicidad activa y derecho de acceso a la información, cabe traer a colación que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha elaborado el Criterio Interpretativo CI/009/2015, de 12 de noviembre, en el que se establece lo siguiente:

I. De acuerdo con la LTAIBG, y teniendo especialmente en cuenta el artículo 1, el artículo 10.2 y la propia estructura sistemática de la norma, la publicidad activa y el derecho a la información son dos caras distintas de una misma realidad: la transparencia de la actividad pública. En un caso -publicidad activa, también llamada transparencia activa- se configura como una obligación de las instituciones y de Administraciones públicas; en el otro -acceso a la información o transparencia pasiva- se configura como un derecho de las personas, basado en el artículo 105.b) de la Constitución.

En ambos casos la finalidad de la transparencia es garantizar que los ciudadanos conozcan la organización y el funcionamiento de sus instituciones públicas. En este sentido, la publicidad activa ha de entenderse como un elemento facilitador de este conocimiento. A través de ella, las organizaciones y Administraciones públicas sitúan de oficio en régimen de publicidad una serie de datos e informaciones que se entienden de interés general, de manera que puedan ser consultadas por aquellos que lo deseen sin necesidad de hacer una petición expresa.

De este modo, parece claro que no debe limitarse o restringirse el ámbito del derecho de acceso de los ciudadanos exclusivamente a las informaciones o datos que no estén sometidos a publicidad activa. Las obligaciones en esta materia conciernen a la Administración y no delimitan ni prejuzgan en modo alguno el derecho de acceso a la información que asiste a los ciudadanos. Antes bien, se hallan al servicio de ese derecho precisamente, para facilitar su ejercicio, abreviando la vía de acceso de los interesados a los datos o informaciones que necesiten.

II. A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que:



- *La definición de información pública accesible a través del ejercicio del derecho de acceso que contiene el artículo 12 de la LTAIBG, no restringe en modo alguno el contenido de esa información por estar o no sometida al régimen de publicidad activa.*
- *En la Ley, la publicidad activa no lleva en ningún caso aparejada una obligación de consulta por parte de los interesados. Se trata, como ya se ha adelantado, de un instrumento que obliga a las Administraciones Públicas. Los ciudadanos y personas interesadas en ejercitar su derecho a saber pueden consultar, si lo desean, la publicidad activa. Tal consulta tiene carácter voluntario y la oportunidad, o no, de acceder a las páginas web o al Portal de Transparencia es una decisión que se ejercerá libremente.*
- *En la LTAIBG la publicidad activa se concreta en la publicación por los organismos o instituciones públicas de los datos e informaciones establecidos en las “correspondientes sedes electrónicas o páginas web”, o en el Portal de Transparencia de la Administración, bien que con una serie de características tendentes a hacerla actual, accesible, comprensible y de acceso fácil. Desde este punto de vista, hay que tener en cuenta que la Ley no impone en modo alguno un deber genérico de uso de medios electrónicos por los ciudadanos y que el manejo de un ordenador o dispositivo electrónico con acceso a Internet no está al alcance de todos los ciudadanos. Como ponen de manifiesto los estudios realizados hasta la fecha sobre utilización de la Administración electrónica en nuestro país, la navegación resulta complicada para algún sector de la ciudadanía y los medios disponibles no están generalizados en igual medida entre toda la población y la totalidad de los territorios (“brecha digital”)*
- *Finalmente, el artículo 22.3 de la LTAIBG regula el supuesto genérico de que la información solicitada vía derecho de acceso haya sido objeto de publicación previa, supuesto que, indudablemente, incluye la publicación de esa información en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. En este sentido, señala que la resolución podrá limitarse a indicar el lugar o medio en que ésta se ha publicado. Así, resulta evidente que los redactores de la LTAIBG están admitiendo implícitamente la tramitación de un procedimiento de acceso referido a una información sometida al régimen de publicidad activa, introduciendo para estos casos la posibilidad (no la obligación) de que la resolución del mismo se limite a indicar el lugar o medio de publicación que, en todo caso, deberá ser*



objeto de una referencia explícita y determinada, no de una simple indicación genérica.

De este modo, de acuerdo con el Criterio Interpretativo transcrito se deduce que la administración autonómica, ante una solicitud de acceso a la información relativa a conocer los "grados o niveles educativos que se imparten en el centro educativo y cuáles son concertados", disponía de dos posibilidades de actuación para satisfacer el derecho de acceso a la información de la ahora reclamante: o bien enviarle la información solicitada, o bien remitirle la concreta dirección URL en la que se encuentra publicada la específica información pretendida. Con relación a esta última posibilidad cabe poner de relieve que, según ha quedado acreditado en los datos que obran en el expediente, mediante la Resolución de 9 de enero de 2017 del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Investigación de la Comunidad de Madrid ahora recurrida, se ha manifestado que la información *"pueden conocerse mediante el Buscador de Colegios, al que puede accederse a través de la página web oficial de la Comunidad de Madrid. En el Buscador consta también aquella otra información relativa a los servicios complementarios y a otras actividades que pueda ofertar el centro"*.

Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través del manejo de un motor de búsqueda, ha tenido acceso al Buscador de Colegios y, específicamente, a la información correspondiente al Centro privado "La inmaculada-padres escolapios", cuya ficha se encuentra disponible en la siguiente dirección http://gestionamadrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarFichaCentro.icm. En la ficha del centro se encuentra información concreta con relación al tipo de enseñanza de que se trate -concertada y privada- por cada una de las etapas educativas; opciones lingüísticas; información complementaria; planes de estudios autorizados. Como puede apreciarse, dicha información publicada se corresponde con el objeto de la concreta solicitud de acceso formulada en la pregunta número 1 por la ahora reclamante. Ahora bien, si nos atenemos a los datos obrantes en el expediente cabe apreciar que la administración autonómica se ha limitado a responder a la solicitud con una simple indicación genérica de dónde se encuentra publicada - Buscador de Colegios-, y no ha indicado, con una referencia explícita a través de la concreta URL, el lugar o medio de publicación de la información - http://gestionamadrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarFichaCentro.icm-, motivo por el que, en consecuencia, procede estimar la reclamación planteada y declarar el derecho de acceso a la información solicitada, debiendo la administración autonómica satisfacer el derecho de acceso a la información solicitada por cualquiera de los dos medios indicados con anterioridad.

4. Con relación a la pregunta número 2 contenida en la solicitud planteada por la ahora reclamante, hay que hacer notar que esta no es la primera ocasión en la que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno conoce de una Reclamación que tiene por objeto conocer el concierto educativo para la financiación de un centro concertado y la financiación recibida por esta vía. Como antecedentes inmediatos cabe aludir a las Reclamaciones números RT/0311/2016, de 15 de marzo de 2017 y RT/0017/2017, de 5 de abril.



Partiendo de la premisa anterior, cabe reiterar la argumentación contenida en dichas reclamaciones:

Con carácter preliminar, cabe recordar que el extenso artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, bajo la rúbrica de módulos de concierto, dispone lo siguiente:

*1. La **cuantía global de los fondos públicos** destinados al sostenimiento de los centros privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto, se establecerá en los presupuestos de las Administraciones correspondientes.*

*2. A efectos de distribución de la **cuantía global** a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas, no pudiendo en éstos ser inferior al que se establezca en los primeros en ninguna de las cantidades en que se diferencia el citado módulo de acuerdo con lo que se establece en el apartado siguiente.*

3. En el módulo, cuya cuantía asegurará que la enseñanza se imparta en condiciones de gratuidad, se diferenciarán:

a) Los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que correspondan a los titulares de los centros.

b) Las cantidades asignadas a otros gastos, que comprenderán las de personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento, así como las cantidades que correspondan a la reposición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente. En ningún caso, se computarán intereses del capital propio. Las citadas cantidades se fijarán con criterios análogos a los aplicados a los centros públicos.

c) Las cantidades pertinentes para atender el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados y consiguiente repercusión en las cuotas de la Seguridad Social; pago de las sustituciones del profesorado y los derivados del ejercicio de la función directiva docente; pago de las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de los trabajadores según lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Tales cantidades se recogerán en un fondo



general que se distribuirá de forma individualizada entre el personal docente de los centros privados concertados, de acuerdo con las circunstancias que concurran en cada profesor y aplicando criterios análogos a los fijados para el profesorado de los centros públicos.

4. Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior, posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas.

5. Los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro, con cargo y a cuenta de las cantidades previstas en el apartado anterior. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones.

6. La Administración no podrá asumir alteraciones en los gastos de personal y costes laborales del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3 de este artículo.

7. Las Administraciones educativas podrán incrementar los módulos para los centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la que se ubiquen.

8. La reglamentación que desarrolle el régimen de conciertos tendrá en cuenta las características específicas de las cooperativas de enseñanza y de los profesores sin relación laboral con la titularidad del centro, a fin de facilitar la gestión de sus recursos económicos y humanos.

9. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado se determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias.

- a. En primer lugar si centramos nuestra atención en el análisis del contenido de una de esas Ordenes, a título de ejemplo cabe aludir a la Orden 5286/2009, de 23 de noviembre, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban los modelos de documentos administrativos en los que se formalizarán los conciertos educativos con centros privados del curso 2009-2010 -BOCM, núm. 304, de 23 de diciembre, de 2009, págs. 22 a 49- podemos extraer los siguientes elementos de juicio.*



Por una parte, a través de dicha Orden se aprueban los documentos administrativos en los que han de formalizarse los conciertos educativos con centros docentes privados para el periodo del curso 2009-2010 a 2012-2013. En concreto, se aprueba un modelo de documento administrativo de concierto con centros privados para cada una de las siguientes enseñanzas: de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria, de educación primaria y secundaria obligatoria, para programas de cualificación profesional inicial, de formación profesional de grado medio, de formación profesional de grado superior, de bachillerato y, finalmente, para educación especial.

Como puede apreciarse, estas Ordenes tienen por objeto aprobar los documentos administrativos en que se formalizarán los conciertos educativos pero en ellos, evidentemente, no figura el nombre del concreto centro educativo, por el contrario, se trata de un “modelo” que habrán de cumplimentar, por una parte, la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, y por otra parte, el representante legal del centro educativo de que se trate.

Por otra parte, en cuanto a su contenido sustantivo, las cláusulas del documento administrativo de formalización del concierto aluden a los compromisos que asumen cada una de las partes, entre las que ahora caber mencionar, a título de ejemplo, la relativa a la obligación de la Administración educativa de asignar los fondos públicos para el sostenimiento del centro concertado en los términos señalados en el artículo 117 de la LOE y, en su caso, en la disposición adicional cuarta del Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, no asumiendo ninguna otra que, en su calidad de empresario, corresponda al titular del centro.

5. *En segundo lugar, por lo que respecta a las leyes de presupuestos a las que la administración autonómica ha remitido a la ahora reclamante a mero título de ejemplo, cabe aludir a la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011. Su artículo 46, bajo la rúbrica de “Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos” desarrolla las previsiones contenidas en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, antes transcrito. Mientras que en su Anexo V, “Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos”, se desarrolla el aludido artículo 46 determinando los importes y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos en los distintos niveles y modalidades educativas. De manera que, para cada una de los distintos niveles educativos, -educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, etc.- se prevé el importe total anual.*



A mayor abundamiento, el propio artículo 46 de la Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011, prevé en las letras e), f), g) y h) de su apartado número 1 la posibilidad de que los centros docentes perciban fondos adicionales, incrementando la cuantía correspondiente a “otros gastos” para financiar i) los recursos materiales estrictamente necesarios para la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro, hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias; ii) para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, dentro de las disponibilidades presupuestarias y previo informe de la citada Consejería; por otra parte, se prevé iii) que los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional Inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006; iv) cuando los centros escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y, finalmente, v) a los centros docentes concertados de educación especial y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda anual de 1.256,48 euros por alumno destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado.

Por último, el artículo 46.2 dispone que “las relaciones profesor/unidad concertada (“ratios”) adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar, podrá ser incrementada por la Consejería de Educación para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley”.

6. *En función de la extensa reproducción de derecho positivo acabada de reseñar, puede deducirse que a través de la remisión a las diferentes Ordenes por las que se aprueban los modelos de documentos administrativos para la formalización de conciertos educativos desde 2009 a 2016, así como a las distintas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de igual fecha, no se satisface el ejercicio del derecho de acceso a la información pública planteado en la solicitud que motiva esta Resolución.*



Recordemos que su objeto consistía en conocer las concretas cantidades que perciben los colegios concertados de referencia por año y centro desde 2009 a 2016. Tal y como se desprende de lo descrito en los anteriores Fundamentos Jurídicos, esa información, por una parte, no figura en las Ordenes que aprueban los modelos de documentos administrativos y, por otra parte, en las Leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma aparecen previstas las cantidades globales sin indicación singularizada de que específica cantidad corresponde a cada uno de los centros educativos.

[...]

[...], cabe traer a colación el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. En concreto, en su Título II -"De la función Interventora"-, su Capítulo IV se dedica al "procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos", desarrollando en su Sección Cuarta lo relativo a "la intervención del reconocimiento de obligaciones y propuestas de pago". De este modo, tras señalar su artículo 23.1 que "[e]l reconocimiento de obligaciones o propuestas de pago a cargo de la Hacienda de la Comunidad de Madrid están sometidos a intervención previa, ya tengan su origen en la Ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados", su artículo 24 dispone que

Al efectuar la intervención previa del reconocimiento de obligaciones o propuestas de pago se deberá comprobar:

- a) Que las obligaciones responden a gastos autorizados y dispuestos y, en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que todas las fases del gasto puedan realizarse simultáneamente.*
- b) Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:*
 - 1.1 Identificación del acreedor.*
 - 2.1 Importe exacto de la obligación.*
 - 3.1 El cumplimiento de la prestación, servicio u otra causa de las que derive la obligación del pago.*
- c) Que se haya comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro, adquisición o subvención, y que ha sido intervenida de conformidad, en su caso, dicha comprobación.*

Asimismo, desde la perspectiva del control contable, el artículo 48 del precitado Decreto 45/1997, de 20 de marzo, prevé, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente



1. Para el cumplimiento de los fines que la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid asigna a la contabilidad pública, ésta se llevará en libros, registros y cuentas a través de sistemas informáticos que se concretan en el Sistema Integrado de Información Económico-Financiera, considerado a los efectos señalados como sistema de información contable de la Comunidad de Madrid.

2. El Sistema Integrado de Información Económico-Financiera tiene por objeto, desde el punto de vista de la contabilidad pública, registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan e integrar la información relativa a aquellas que con esta naturaleza se realicen en el ámbito del sector público, reflejando los resultados que surjan del ejercicio de la actividad y facilitando la información que se precise para la toma de decisiones.

[...]

7. De lo expuesto hasta ahora, cabe concluir que no parece razonable considerar que la solicitud de acceso a la información “pudiera ser considerada abusiva dado que la elaboración de un informe específico requeriría un tratamiento que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información”.

[...]

La información solicitada -nombre de centro y cuantía anual- ha de figurar en los correspondientes documentos elaborados al amparo del artículo 24 del Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, al llevar a cabo la intervención previa del reconocimiento de obligaciones o propuestas de pago a los centros educativos concertados anualmente -Identificación del acreedor e Importe exacto de la obligación-. De este modo, atendiendo al número de centros concertados de que se trata, que según ha manifestado la administración autonómica es de 18, así como al período de tiempo sobre el que se pide la información, años 2009 a 2016, cabe advertir que se trata de indicadores objetivos en virtud de los cuales se puede llevar a cabo una ponderación razonada según la cual se concluya confirmando que, a juicio de este Consejo, atender a la solicitud de acceso a la información no implica colapsar los servicios públicos en el sentido manifestado por la administración autonómica. En definitiva, procede estimar la Reclamación presentada.

En definitiva, de lo anterior cabe estimar la reclamación en este punto específico, de modo que la administración autonómica deberá trasladar a la ahora reclamante copia del concierto educativo y de las cantidades abonadas al Centro Educativo de



referencia en los últimos cuatro cursos 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; y 2016/2017.

5. Por lo que respecta a las preguntas número 3, 4 y 5 se ha puesto de manifiesto por la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación en las alegaciones remitidas a esta Institución que, desde la perspectiva de su ámbito competencial, sólo dispone de información relacionada con la financiación que el titular del centro recibe por la cualidad de “concertado” del centro, que su competencia alcanza únicamente para autorizar y supervisar la impartición por el centro de enseñanza reglada, así como para regular las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios.

De acuerdo con ello, cabe señalar que, tal y como se desprende de su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A estos efectos, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG se define la “información pública” como

“los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”.

De acuerdo con los preceptos acabados de reseñar cabe recordar que el concepto de información pública que recoge la Ley de Transparencia, en función del cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” - artículo 1 de la LTAIBG-.

Como ha quedado acreditado en las alegaciones remitidas por la precitada Dirección General, según han afirmado, la misma no dispone de la información solicitada, de modo que, en definitiva, cabe concluir desestimando la reclamación planteada con relación a las preguntas números 3, 4 y 5 de la solicitud de referencia dado que, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la LTAIBG, no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información.

6. En cuanto respecta a la pregunta número 6 relacionada con los precios o financiación privada que obtenga el Centro escolar procedente de los padres y por cualquier tipo de actividad, educativa o no educativa, ya sea principal o complementaria, cabe formular la siguiente consideración de carácter formal.



Las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1, en lo que atañe a la resolución de las solicitudes de información, que,

“La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.”

Mientras que, por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone lo siguiente:

“Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.”

Del precepto transcrito se infieren dos consideraciones que presentan interés para el caso que nos ocupa. La primera de ellas consiste en la existencia de una regla procedimental específica aplicable a aquellos casos de considerables solicitudes de información en atención a su volumen o complejidad. En efecto, en el segundo párrafo del artículo 20.1 de la LTAIBG se prevé que cuando concorra el supuesto de hecho de que *“el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”*, la consecuencia jurídica será que la administración pública que ha de resolver la solicitud de acceso a la información tiene la posibilidad de ampliar el plazo de un mes del que dispone para dictar y notificar la resolución por otro mes adicional. La administración autonómica, en el presente caso, no aplicó la ampliación del plazo acabada de reseñar, tal y como se deduce de los antecedentes obrantes en el expediente, de modo que disponía de un mes para dictar y notificar la resolución en materia de acceso a la información contractual solicitada.

La segunda consecuencia que se deriva del señalado precepto, que guarda relación con la anterior, consiste en que el artículo de referencia vincula el comienzo del cómputo del plazo de un mes del que dispone la administración para resolver, mediante resolución expresa o por silencio administrativo, a la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para resolver. En el caso que nos ocupa, según se desprende de los antecedentes, tal fecha es el 9 de diciembre de 2016, de manera que el órgano competente de la administración municipal disponía de un mes –hasta el 9 de enero de 2017- para dictar y notificar la correspondiente resolución.

Según consta en el expediente, la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas en su resolución de 9 de enero de 2017 no traslado información alguna



con relación a la concreta solicitud que figuraba en la pregunta 6, por el contrario, ha sido en su escrito de alegaciones de fecha 28 de febrero de 2017 en el que ha dado traslado a esta Institución de la información de referencia.. Esto es, teniendo en cuenta que la solicitud fue presentada el pasado 9 de diciembre de 2016, el expediente se ha resuelto incumpliendo los plazos fijados en la LTAIBG. De este modo, siguiendo el criterio establecido en anteriores resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno –entre otras, las números R/272/2015, de 6 de noviembre; R/355/2015, de 10 de diciembre; y, finalmente, R/388/2015, de 17 de diciembre- ha de concluirse estimando la reclamación planteada, puesto que, a pesar de que se ha facilitado la información en fase de alegaciones en el procedimiento de tramitación de la reclamación, lo apropiado hubiera sido contestar directamente al solicitante en el plazo legalmente establecido de un mes desde que la administración autonómica recibió la solicitud de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG.

7. Finalmente, en cuanto a la pregunta número 7 contenida en la solicitud de referencia, relacionada con si el centro educativo dispone de proyecto propio de organización de enseñanza, en caso afirmativo indicar cuáles, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima que la administración autonómica ha cumplido con el objeto de la LTAIBG. En efecto, tal y como se deduce de los antecedentes obrantes en el expediente, es la Orden 1495/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de educación Juventud y deporte la que ha autorizado un proyecto propio en el ciclo formativo de grado superior “Automoción”. De manera que la invocación a la orden 5279/2012 que efectúa la ahora reclamante en la que basa su disenso al sentido de la resolución ahora recurrida, hay que entenderla que carece de justificación alguna desde el momento en que, por aplicación de la Orden 3814/2014, de 29 de diciembre, quedaron sin efecto a la finalización del curso 2015/2016.

En definitiva, en este punto concreto procede desestimar la reclamación planteada.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede

PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMENTE la Reclamación presentada por [REDACTED] frente a la Resolución del Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de 9 de enero de 2017 de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en los Fundamentos Jurídicos 3, 4 y 6 de esta Resolución.

SEGUNDO: INSTAR a la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la Comunidad de Madrid a que, en el plazo de un mes, traslade la información solicitada por [REDACTED] y, asimismo, que remita a este



Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información trasladada a la reclamante.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez